

Santiago, diecisiete de junio de dos mil veinticinco.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

Primero: Que en este procedimiento ordinario de terminación de contrato de arrendamiento e indemnización de perjuicios, seguido ante el Primer Juzgado Civil de Viña del Mar, bajo el Rol C-2926-2020, caratulado “Aluma Systems Servicios Chile Ltda. con Constructora Leybar Limitada”, se ha ordenado dar cuenta de la admisibilidad de los recursos de casación en la forma y en el fondo deducidos por la parte demandante, y de los recursos de casación en la forma y en el fondo deducidos por la parte demandada, contra la sentencia de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, de veintinueve de enero de dos mil veinticinco, que revocó el fallo de primer grado, de doce de abril de dos mil veintitrés, en aquella parte que acogió la demanda subsidiaria de indemnización de perjuicios por responsabilidad civil contractual, declarando incumplida la obligación de restitución de materiales que el contrato imponía a la parte demandada, condenándole a ésta a pagar la suma de \$16.379.637.- a título de perjuicios derivados de la falta de restitución de materiales, y la suma de \$9.622.039.- a título de lucro cesante, con costas; y, en su lugar, desestimó la citada acción subsidiaria respecto de la sumas y rubros citados, por no haber incumplido la parte demandada la obligación de restitución antes señalada, y además le eximió del pago de las costas; confirmando en lo demás la sentencia apelada que: (i) rechazó la demanda principal de terminación de contrato de arrendamiento e indemnización de perjuicios; (ii) acogió la acción subsidiaria de indemnización de perjuicios en cuanto condenó a la demandada a pagar la suma de \$17.438.306.- por concepto de rentas impagas, y (iii) desestimó la demanda reconvenzional de indemnización de perjuicios por responsabilidad civil contractual.

EN CUANTO AL RECURSO DE CASACIÓN EN LA FORMA DE LA PARTE DEMANDANTE:

Segundo: Que la recurrente de casación formal funda su arbitrio, en primer término, en la causal prevista en el numeral 7° del artículo 768 del Código de Enjuiciamiento Civil.

Explica que el vicio denunciado tiene lugar porque el fallo recurrido contiene decisiones contradictorias, puesto que estableció en su motivaciones que la demandante entregó más equipos de los efectivamente restituidos por la demandada; y, no obstante lo anterior, se tuvo por acreditado que ésta cumplió con su obligación de restitución.

Acto seguido, invoca la causal de nulidad adjetiva contemplada en el numeral 5° del artículo 768 del Código de Procedimiento Civil, en relación con el numeral 6° del artículo 170 del mismo cuerpo legal, por cuanto los sentenciadores de alzada omitieron pronunciarse sobre la adhesión a la apelación deducida por su parte en



contra del fallo de primer grado, en cuya virtud ésta solicitó que se acogiera íntegramente la demanda subsidiaria de indemnización de perjuicios por concepto de rentas insolutas, y falta de restitución de materiales.

Solicita que se invalide el fallo recurrido y se dicte sentencia de reemplazo con arreglo a la ley.

Tercero: Que la causal de invalidación formal prevista en el numeral 7° del artículo 768 del Código de Procedimiento Civil, no puede admitirse al no concurrir la hipótesis que la configura.

Sobre el particular, valga tener presente que dicho defecto formal sólo se produce cuando la sentencia impugnada contiene dos decisiones imposibles de cumplir simultáneamente, porque una se opone a la otra, esto es, que existan dos dictámenes o determinaciones que recíprocamente se destruyen.

Sin embargo, dicha situación no acontece en la especie, toda vez que el fallo recurrido de alzada al revocar parcialmente la sentencia de primer grado, y confirmarla en lo demás haciéndola suya, ha resuelto rechazar la acción principal de terminación de contrato e indemnización de perjuicios, acoger parcialmente la subsidiaria de indemnización de perjuicios por responsabilidad contractual, y desestimar la reconvencional indemnizatoria; sin que pueda vislumbrarse la existencia de contradicción alguna entre tales decisiones, pues no están en oposición con ninguna otra que haga imposible su inteligencia y comprensión.

Cuarto: Que, por otra parte, el vicio de nulidad formal fundado en el numeral 5° del artículo 768 del Código de Procedimiento Civil, en relación con el numeral 6° del artículo 170 del mismo cuerpo legal, también debe ser descartado, toda vez que tal anomalía no concurre en la especie.

En efecto, para un correcto análisis del defecto en estudio, valga precisar que éste solo aparece cuando la sentencia carece de la decisión del asunto controvertido, esto es, de las acciones y excepciones que se hayan hecho valer en el juicio, con omisión de las que fueran incompatibles con las aceptadas.

Sin embargo, de una atenta lectura del fallo de alzada recurrido, es posible constatar que –contrariamente a lo postulado por la recurrente– éste sí contiene la decisión de los asuntos sometidos al conocimiento del Tribunal, en tanto los jueces del fondo han cumplido con pronunciarse sobre todas las acciones que por vía principal, subsidiaria y reconvencional se han ejercitado en autos.

Quinto: Que, no obsta a la conclusión anterior, la circunstancia que los sentenciadores de alzada no se hayan hecho cargo expresamente de abordar la adhesión a la apelación deducida por la demandante; puesto que impugnado por dicha vía el fallo de primer grado, con motivo de no haberse accedido íntegramente a la pretensión subsidiaria de indemnización de perjuicios; al confirmarse la



sentencia primer grado en aquella parte, necesariamente debe entenderse que se han desechado por los sentenciadores de alzada recurridos las alegaciones de la adherente en razón de los mismos términos consignados en la sentencia apelada.

Sexto: Que, a mayor abundamiento, tampoco puede pasar inadvertido que el recurso de nulidad formal carece de peticiones concretas.

De conformidad con lo que establece el artículo 764 del Código de Procedimiento Civil, el petitorio de un recurso de casación como el deducido en autos, debe plantear la solicitud que se acoja el recurso, se anule el fallo impugnado, y se dicte la correspondiente sentencia de reemplazo por la cual se revoque o confirme la de primer grado, según sea el caso, decidiéndose del modo como interesa a la parte recurrente, bajo los parámetros que establece el artículo 786 del mismo texto legal; tal como se ha resuelto por esta Corte de Casación (Corte Suprema, sentencia de 20 de octubre de 2004, RDJ, t. CI, sec. 1ª, pág. 290).

Pues bien, el petitorio del escrito de casación en la forma examinado expresa únicamente que se invalide el fallo recurrido, y se dicte sentencia de reemplazo con arreglo a ley; omitiendo de este modo lo que se pretende en virtud de esta última, como se exige para un recurso de derecho estricto.

En consecuencia, bajo las condiciones descritas, no resulta posible el acogimiento del recurso de nulidad formal, habida cuenta que con la petición efectuada por la parte recurrente, este Tribunal no podría dictar sentencia de reemplazo, al carecer de una petición concreta en relación con lo que se aspira conseguir por su intermedio.

Séptimo: Que, en consecuencia, el arbitrio de nulidad formal no puede prosperar en ninguno de sus extremos.

EN CUANTO AL RECURSO DE CASACIÓN EN EL FONDO DE LA PARTE DEMANDANTE:

Octavo: Que la recurrente de casación en el fondo sustenta su arbitrio en la infracción de los artículos 1547, 1698, 1700 y 1706 del Código Civil.

Acusa, en síntesis, que la infracción normativa se produce porque el fallo recurrido dio por establecido que la parte demandada cumplió de manera diligente e íntegra con su obligación de restituir los equipos que le fueron entregados por la demandante en arriendo; en circunstancias que, conforme la documental rendida, no es posible tener por asentado tal hecho, pues ésta sólo permite tener por acreditado que la parte demandada restituyó 1255 de los 5366 bienes que recibió en arriendo durante la ejecución de la obra “*Don César*”; desconociéndose de este modo el valor probatorio de la instrumental acompañada y que hace plena prueba entre las partes para tales efectos.



Solicita que se invalide el fallo recurrido y se dicte nueva sentencia conforme a la ley y el mérito de los hechos, según lo indica el artículo 785 del Código de Procedimiento Civil.

Noveno: Que el artículo 772 N° 1 del Código de Procedimiento Civil sujeta el recurso de casación en el fondo a un requisito indispensable para su admisibilidad, como es que el escrito en que se interpone “exprese”, es decir, explicita en qué consiste -cómo se ha producido- el o los errores, siempre que éstos sean de derecho.

Décimo: Que versando la contienda sobre la acción de terminación de contrato de arrendamiento e indemnización de perjuicios por responsabilidad contractual, la exigencia consignada en el motivo anterior, obligaba a la parte impugnante a denunciar como infringidos todos aquellos preceptos que, al ser aplicados, han servido para resolver la cuestión controvertida.

En este caso particular, los artículos 1437, 1438, 1489, 1551, 1552, 1553, 1556, 1557, 1558, 1559, 1915, 1924, 1942, 1947, 1950 y siguientes del Código Civil, son los que prevén las acciones ejercitadas en autos, el estatuto común de responsabilidad civil contractual, y la regulación del contrato de arrendamiento y, en particular, de las obligaciones que emanan de éste para las partes y sobre cuyo cumplimiento se discute en la especie.

Por consiguiente, configurando dichas normas las reglas *decisoria litis* del caso *sub-judice*, al no denunciarse por la recurrente la infracción de dicha preceptiva sustantiva básica, inequívocamente, se genera un vacío que esta Corte no puede subsanar para el caso de acogerse el recurso de nulidad y dictarse sentencia de reemplazo en los términos solicitados por la recurrente, atendido el carácter de derecho estricto que reviste el arbitrio de nulidad intentado, razón por la que éste no puede ser admitido a tramitación.

Undécimo: Que, sin perjuicio de la anomalía anterior, del examen de los antecedentes del proceso, fluye también que el recurso de nulidad en estudio se encuentra construido sobre la base de una propuesta fáctica diversa de aquella asentada por los jueces del fondo.

En efecto, mientras el fallo recurrido para desestimar la demanda subsidiaria, dejó asentado que la parte demandada dio íntegro y oportuno cumplimiento a la obligación de restituir los bienes que le fueron entregados en alquiler por la demandante; la parte recurrente –por el contrario– postula a través de su arbitrio que la demandada no ha dado completa solución a dicha obligación por cuanto solo ha restituido una parte de los bienes que le fueron entregados por la actora en arriendo.

Sin embargo, valga precisar que sólo los jueces del fondo se encuentran facultados para fijar los hechos y, efectuada correctamente dicha labor en mérito de las probanzas aportadas, resultan ser éstos inamovibles conforme al artículo 785 del



Código de Procedimiento Civil; a menos que se hubiere denunciado eficazmente la contravención de normas reguladoras de la prueba; cuestión que, en la especie, no ha acontecido satisfactoriamente.

Duodécimo: Que, en efecto, sobre el particular la parte recurrente se ha limitado a denunciar la infracción de los artículos 1698, 1700 y 1706 del Código Civil, a propósito de la carga de la prueba, y la valoración de la documental rendida; sin embargo, no es posible avizorar la forma en que los sentenciadores del fondo efectivamente hayan conculcado dichas reglas.

Tal como ha tenido oportunidad de señalar esta Corte, la regla del “*onus probandi*”, sólo se vulnera en la medida que se obligue a una de las partes a acreditar un hecho que corresponde probar a la contraria; cuestión que no ha acontecido en este caso, dado que es el propio fallo el que impone a la actora la carga de acreditar la existencia de la relación contractual entre las partes y de las obligaciones cuya infracción reclama, y a la demandada la de probar la extinción o cumplimiento de aquéllas, sin que esta última haya cumplido con dicha carga, conforme el análisis de la prueba rendida.

Por otra parte, de la sola lectura del fallo impugnado puede constatarse que los sentenciadores del fondo tampoco han negado el carácter público o privado de los documentos acompañados al proceso, o asignado a éstos un valor distinto del previsto por la ley; sino que han ponderado la instrumental allegada, pero efectuando de ésta un análisis que no derivó en el establecimiento de los hechos que son pretendidos por la recurrente; quedando así en evidencia que las alegaciones de ésta se orientan más bien a promover que esta Corte realice una nueva valoración de dichas probanzas, lo que constituye una actividad que resulta ajena al recurso de casación de estudio.

Por consiguiente, siendo necesario para el éxito de la pretensión de la recurrente, modificar los hechos fijados por los jueces de la instancia; y no pudiendo aquello verificarse en esta sede de casación, por lo antes señalado, indefectible es que el arbitrio de nulidad debe ser desestimado por manifiesta falta de fundamento.

Decimotercero: Que, por lo expuesto, el recurso de nulidad sustantiva debe ser desestimado por adolecer de manifiesta falta de fundamento.

EN CUANTO AL RECURSO DE CASACIÓN EN LA FORMA DE LA PARTE DEMANDADA:

Decimocuarto: Que la recurrente de nulidad formal funda su arbitrio en la causal de invalidación prevista en el numeral 5° del artículo 768 del Código de Procedimiento Civil, en relación con el numeral 4° del artículo 170 del mismo cuerpo legal.



Postula que el defecto adjetivo se verifica porque la sentencia recurrida carece del análisis de la prueba documental rendida, así como también de las motivaciones que le sirven de fundamento para acoger la acción subsidiaria por la que se condenó a su parte al pago de rentas adeudadas; pese a que, conforme la instrumental aludida, dicha acción debió ser desestimada dado que se probó con aquélla la existencia de un excedente a su favor por la suma de \$65.000.000.- que permitía compensar con creces la supuesta deuda de su parte con la demandante.

Solicita que se invalide el fallo recurrido y se dicte sentencia de reemplazo que rechace íntegramente la demanda subsidiaria de autos, con costas de la causa y del recurso.

Decimoquinto: Que el arbitrio de nulidad formal no puede prosperar, toda vez que revisados los antecedentes del proceso, se desprende que aquél no fue preparado en los términos que exige el inciso primero del artículo 769 del Código de Procedimiento Civil.

En efecto, la citada norma dispone que para que pueda ser admitido el recurso de casación en la forma es indispensable que quien lo entabla haya reclamado de la falta, ejerciendo oportunamente y en todos sus grados los recursos establecidos por la ley.

Sin embargo, en este caso, el reproche de la recurrente se dirige contra el fallo de alzada que se limitó a confirmar el de primer grado, en aquella parte relativa al pago de las rentas de arrendamiento a que fue condenada la parte demandada; sin que esta última decisión haya sido objeto de la impugnación de nulidad formal que ahora se pretende intentar contra la sentencia de segunda instancia; cuestión que deja en evidencia que, en la especie, no se reclamó por la demandada oportunamente y en todos sus grados, del vicio que actualmente alega respecto de la sentencia de alzada.

Decimosexto: Que, no obsta a la conclusión anterior, la circunstancia que aquel defecto de nulidad formal haya sido expuesto por la recurrente en la apelación que dedujo en contra del fallo de primera instancia, toda vez que aquélla no es la vía idónea para reclamar de la anomalía adjetiva que aduce, la que debió ser alegada en los términos que exige la disposición antes citada y, particularmente, a través de los medios previstos por la ley para tales efectos, cuyo no es el arbitrio de apelación mencionado.

Decimoséptimo: Que, así las cosas, el recurso de nulidad formal no puede admitirse a tramitación.

EN CUANTO AL RECURSO DE CASACIÓN EN EL FONDO DE LA PARTE DEMANDADA:

Decimoctavo: Que la parte recurrente de nulidad de fondo sustenta su arbitrio en la infracción de las normas reguladoras de la prueba, reiterando al



respecto que el fallo recurrido omitió ponderar la instrumental acompañada por su parte al proceso, y que daba por acreditado el hecho de tener a su favor un excedente de materiales por más de \$65.000.000.-, que pudo perfectamente ser compensada con aquélla reclamada por concepto de rentas impagas.

Solicita que se invalide el fallo recurrido y se dicte sentencia de reemplazo que rechace la demanda de terminación de contrato e indemnización de perjuicios, con costas.

Decimonoveno: Que el artículo 772 del Código de Enjuiciamiento Civil, en armonía con lo previsto en los artículos 764 y 767 del citado cuerpo legal, exige como sustento de la invalidación de la sentencia impugnada, el quebrantamiento de una o más normas legales contenidas en la decisión del asunto; siendo por ello menester que al interponerse un recurso con tal objeto, su promotora deba cumplir necesariamente con lo exigido por el precepto en análisis, esto es, expresar en qué consisten el o los errores de derecho de que adolece la sentencia recurrida.

Asimismo, además del cumplimiento del requisito enunciado en el párrafo precedente, con idéntica rigurosidad, el mismo artículo 772 aludido, impone a quien interponga un recurso de casación en el fondo, la obligación de señalar, de manera circunstanciada, en el respectivo escrito, el modo en que el o los errores de derecho que denuncia, han influido sustancialmente en lo dispositivo de la sentencia que se trata de invalidar; por ende, la exigencia señalada no se agota con la simple indicación de las normas conculcadas, sino que requiere además de un desarrollo argumentativo en torno a los yerros de derecho que se acusan.

Sin embargo, al enfrentar lo expuesto precedentemente con el recurso de casación en el fondo examinado, se concluye indefectiblemente que éste carece de los requerimientos legales exigidos para su interposición; puesto que el recurrente se limita a invocar, de forma genérica y vaga, la infracción de las normas reguladoras de la prueba, sin citar como vulnerada alguna regla particular que detente tal naturaleza; lo que constituye motivo suficiente para desestimar el presente arbitrio de nulidad.

Vigésimo: Que, en consecuencia, el recurso de nulidad sustantiva en estudio debe ser descartado por adolecer de manifiesta falta de fundamento.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 764, 765, 766, 767, 768, 769, 772, 781 y 782 del Código de Procedimiento Civil, se **rechazan** los recursos de casación en la forma y en el fondo interpuestos por el abogado Stephan Lührmann Ortiz, en representación de la parte demandante, y los recursos de casación en la forma y en el fondo deducidos por el abogado Roberto De La Paz Valenzuela, en representación de la parte demandada, contra la sentencia de



veintinueve de enero de dos mil veinticinco, dictada por la Corte de Apelaciones de Valparaíso.

Regístrese, notifíquese, comuníquese y devuélvase, vía interconexión.

Rol N° 8.695-2025



Pronunciado por la Primera Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros (as) Arturo Prado P., Mauricio Alonso Silva C., María Angélica Cecilia Repetto G., Mario Carroza E. y Abogado Integrante Álvaro Rodrigo Vidal O. Santiago, diecisiete de junio de dos mil veinticinco.

En Santiago, a diecisiete de junio de dos mil veinticinco, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.

